

REVISTA DE

EL COLEGIO DE SAN LUIS

Nueva época • año XII, 23 • enero a diciembre de 2022

Incidencias de organizaciones
prodemocráticas en Monterrey
a finales del siglo XX

Una aproximación desde las narrativas
de sus participantes

Incidences of Pro-Democratic Organizations
in Monterrey at the end of the 20th Century
An Approach from the Narratives
of its Participants

María Teresa Villarreal Martínez

Marco Antonio Aranda Andrade

Revista multidisciplinaria enfocada
en las Ciencias Sociales y las Humanidades

REVISTA DE EL COLEGIO DE SAN LUIS

DIRECTOR

Fernando A. Morales Orozco

CONSEJO CIENTÍFICO (2021-2024)

Flavia Daniela Freidenberg Andrés, *Universidad Nacional Autónoma de México*

Aurelio González Pérez, *El Colegio de México*

Alejandro Higashi, *Universidad Autónoma Metropolitana campus Iztapalapa*

Jennifer L. Jenkins, *The University of Arizona*

Silvia Mancini, *Université de Lausanne*

Juan Ortiz Escamilla, *Universidad Veracruzana*

Elodie Razy, *Université de Liège*

Antonio Saborit, *Instituto Nacional de Antropología e Historia*

Martín Sánchez Rodríguez, *El Colegio de Michoacán*

Maria Cristina Secci, *Università degli Studi di Cagliari*

Pedro Tomé Martín, *Consejo Superior de Investigaciones Científicas*

Ricardo Uvalle Berrones, *Universidad Nacional Autónoma de México*

Rosa Gabriela Vargas Cetina, *Universidad Autónoma de Yucatán*

COMITÉ EDITORIAL

Neyra Alvarado

Agustín Ávila

Sergio Cañedo

Javier Contreras

Julio César Contreras

Norma Gauna

José A. Hernández Soubervielle

Marco Chavarín

EDICIÓN

Jorge Herrera Patiño / *Jefe de la Unidad de Publicaciones*

Diana Alvarado / *Asistente de la dirección de la revista*

Pedro Alberto Gallegos Mendoza / *Asistente editorial*

Adriana del Río Koerber / *Corrección de estilo*

COORDINADOR DE ESTE NÚMERO

Fernando A. Morales Orozco

DISEÑO DE MAQUETA Y PORTADA

Ernesto López Ruiz



PRESIDENTE

David Eduardo Vázquez Salguero

SECRETARIO ACADÉMICO

José A. Hernández Soubervielle

SECRETARIO GENERAL

Jesús Humberto Dardón Hernández



La Revista de El Colegio de San Luis, nueva época, año XII, número 23, enero a diciembre de 2022, es una publicación continua editada por El Colegio de San Luis, A. C., Parque de Macul 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C. P. 78294, San Luis Potosí, S. L. P. Tel.: (444) 8 11 01 01. www.colsan.edu.mx, correo electrónico: revista@colsan.edu.mx. Director: Fernando A. Morales Orozco. Reserva de derechos al uso exclusivo núm. 04-2014-030514290300-203 / ISSN-E: 2007-8846.

D. R. Los derechos de reproducción de los textos aquí publicados están reservados por la Revista de El Colegio de San Luis. La opinión expresada en los artículos firmados es responsabilidad del autor.

Los artículos de investigación publicados por la *Revista de El Colegio de San Luis* fueron dictaminados por evaluadores externos por el método de doble ciego.

INCIDENCIAS DE ORGANIZACIONES PRODEMOCRÁTICAS EN MONTERREY A FINALES DEL SIGLO XX UNA APROXIMACIÓN DESDE LAS NARRATIVAS DE SUS PARTICIPANTES

Incidences of Pro-Democratic Organizations in Monterrey
at the end of the 20th Century

An Approach from the Narratives of its Participants

MARÍA TERESA VILLARREAL MARTÍNEZ*

MARCO ANTONIO ARANDA ANDRADE**

RESUMEN

En este artículo se intenta comprender la identidad y las acciones de una parte de la sociedad civil organizada de Monterrey, Nuevo León (México), en la década de los 90 del siglo XX. Se realizó un diseño cualitativo basado en dos casos de estudio, usando como estrategia las narrativas de participantes en organizaciones en contexto compartido. Como resultado, se identificaron las líneas de acción e incidencias comunitaria, cívica, política y personal. La selección intencionada de la muestra puede limitar el alcance de las inferencias. La investigación es relevante dada la falta de análisis del tema. Alude a casos de estudio inexplorados y tiene precisión conceptual, con aparato crítico relevante y suficiente. Así, es posible conocer parte de la historia del sector cívico organizado de Monterrey en un periodo pocas veces abordado en la investigación académica.

PALABRAS CLAVE: ORGANIZACIONES CIVILES, MOVIMIENTOS SOCIALES, INCIDENCIA, DEMOCRATIZACIÓN, MONTERREY.

* Universidad Autónoma de Nuevo León, Instituto de Investigaciones Sociales. Correo electrónico: terevima@yahoo.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9873-4931>

** Universidad Autónoma de Nuevo León, Instituto de Investigaciones Sociales. Correo electrónico: aranda.estudios@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1517-8648>

ABSTRACT

This article tries to understand the identity and actions of a part of the organized civil society of Monterrey, Nuevo León, in the 90s of the 20th century. It has a qualitative design based on two case studies, using as a strategy the narratives of participants in organizations in a shared context. As a result it identifies lines of action and community, civic, political and personal impact, even though there is an intentional sample selection may limit the range of inferences. It's relevant given the lack of analysis of the topic. Refers to unexplored case studies and a conceptual precision with relevant and sufficient critical apparatus.

KEYWORDS: CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS, SOCIAL MOVEMENTS, INCIDENCE, DEMOCRATIZATION, MONTERREY.

Fecha de recepción: 20 de mayo de 2022.

Dictamen 1: 16 de julio de 2022.

Dictamen 2: 7 de agosto de 2022.

<https://doi.org/10.21696/rcsl122320221463>

INTRODUCCIÓN

Los estudios publicados recientemente sobre las organizaciones de la sociedad civil de Nuevo León (México) se enfocan en la revisión de los colectivos surgidos en este siglo XXI; son escasas las referencias a las agrupaciones ciudadanas de finales del siglo XX, aunque algunas de ellas siguen activas casi tres décadas después. En la investigación sobre experiencias organizativas en Monterrey parece haber un salto entre el movimiento urbano popular de los años 70, que se debilitó a mediados de la década de los 80 y las agrupaciones civiles que se conformaron en Monterrey en el siglo XXI. En 2001, Brumley (2001) advierte que mientras son abundantes las investigaciones sobre movimientos sociales desarrollados en las dos últimas décadas del siglo XX en la ciudad de México, Guadalajara y Chiapas, hay un hueco en la literatura sobre la acción colectiva llevada adelante en esos años en el norte del país, en específico en Nuevo León.

En un estudio amplio de varias regiones del país coordinado por Frago y Bravo (2018), diversos autores dan cuenta de la conformación de esfuerzos civiles durante los años 90 orientados a la democratización en México, la cual tuvo lugar en dos velocidades, a decir de Canto (2018): la nacional y la local.¹ La incidencia en las elecciones, en la construcción de políticas públicas y en la participación ciudadana fueron algunas agendas centrales en la articulación de estos esfuerzos colectivos; la democratización resultó ser una estrategia unificadora frente a las consecuencias agraviantes de la implementación del modelo neoliberal en el país (Shefner y Stewart, 2011).

En efecto, Nuevo León es un caso aparte por las particularidades de su contexto económico y político. Entre la escasa producción académica centrada en las organizaciones con actividad notable durante los 90 y los primeros años del nuevo milenio, destacan los trabajos de Brumley (2010, 2013, 2014) enfocados en la diversidad de organizaciones no gubernamentales (ONG) en el estado orientadas a la búsqueda de influencia en la arena político-electoral, en la educación y la provisión de servicios, principalmente; y en el Barzón y la agenda democratizadora local. Resultan ser aportaciones centrales² la caracterización de los perfiles organizacionales realizada

¹ Además del trabajo coordinado por Frago y Bravo, centrado prácticamente en el estudio de una decena de estados, destacan las investigaciones a nivel local de Alatorre (2005) y Bautista (2007).

² Previamente, en 2007, se publicó el informe sobre las organizaciones de la sociedad civil en la entidad, en el que Arteaga *et al.* afirmaron que se trataba de “un tema no investigado” (p. 9). Ante la “ausencia de datos e investigaciones previas” (p. 11), presentaron un panorama descriptivo en el que ofrecieron datos estadísticos totales sobre aspectos organizativos, legales, contables y de recursos humanos de una parte de las asociaciones incluidas en los

por la autora, la identificación de agendas y estrategias de movilización dependientes en alto grado del contexto sociopolítico dominado por el empresariado y un sistema bipartidista en ese momento, así como las estrategias de desmovilización y cooptación orquestadas por el gobierno.

En el mismo periodo, Villarreal Martínez (2010) revisa el desarrollo de mecanismos formales de interacción entre grupos civiles y gobierno de finales del siglo XX y presenta información documental sobre el surgimiento en los años 90 de algunas de las organizaciones que se autoidentificaron como no gubernamentales. Aranda y Villarreal Martínez (2019), más recientemente, examinan los aspectos y las dinámicas organizacionales de tres asociaciones conformadas en los 90 durante la transición política en el estado, las cuales trabajaron en las agendas identificadas por Brumley y la misma Villarreal con las mismas estrategias y resultados, una labor con pocos efectos más allá del plano local y electoral (Brumley, 2010; Shefner y Steward, 2011).

Los artículos académicos que se refieren a organizaciones de la sociedad civil nuevoleonesa de los últimos años abordan con mayor frecuencia la acción y la incidencia de los grupos que se formaron ya en este siglo XXI para actuar en coyunturas específicas. Medellín (2006) aborda la gobernabilidad en Nuevo León en el primer lustro de este siglo, mediante el estudio de caso del Comité Pro Rescate Fundidora. Ruiz (2018) analiza la estrategia de incidencia desarrollada entre 2013 y 2016 por Género, Ética y Salud Sexual, A. C., para reformar el Código Civil de Nuevo León a fin de que incluyera el matrimonio igualitario. Arzaluz y Zamora (2018) examinan las acciones frente a la violencia e inseguridad emprendidas a partir de 2010 por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, La Banqueta se Respeta y Pueblo Biciclero. Sobre los colectivos de víctimas surgidos en los últimos 10 años a raíz del fenómeno de la desaparición de personas figuran los trabajos de Garza (2017), Iliná (2020), Irazuzta (2020), Villarreal (2016) y Villarreal Martínez (2016).

El presente artículo se ubica, entonces, en la línea de estudios enfocados en los primeros años de actuación pública de las organizaciones civiles de finales del siglo XX que introdujeron de forma explícita en su agenda los asuntos relacionados con la democracia y los derechos políticos, con objeto de contribuir a la comprensión del desarrollo de la sociedad civil organizada en Nuevo León. Un aspecto novedoso de este trabajo es que parte de las narrativas testimoniales de participantes de dos agrupaciones con un perfil prodemocrático. Estas experiencias contadas por los

directorios elaborados en 2005 y 2006 por el Consejo de Desarrollo Social, institución de gobierno estatal que en esos años estaba a cargo de la relación con el sector organizado de la sociedad.

mismos sujetos que han participado en ellas, desde su perspectiva y su ubicación en el ámbito social y político, ofrecen la oportunidad de incluir el punto de vista de las/los activistas para comprender la identidad y las acciones de los primeros grupos del sector cívico organizado de esta ciudad norteña de México.

En el primer apartado ofrecemos un marco teórico, para analizar las formas de acción e incidencia de las organizaciones civiles y para abordar las consecuencias políticas, culturales y biográficas del actuar contencioso de estas. En el segundo explicamos el acercamiento metodológico del trabajo, centrado en sortear los retos que supone el trabajar con narrativas y los sesgos, alcances y posibilidades que ello implica. La descripción del contexto en el que operaron las organizaciones estudiadas es el tema del tercer apartado. En el cuarto presentamos los resultados de esta investigación. Y cerramos con reflexiones teóricas que pretenden contribuir al entendimiento de la conformación y de la incidencia de la sociedad civil organizada de Nuevo León.

PROPUESTA TEÓRICA PARA ESTUDIAR LA IDENTIDAD, LA INCIDENCIA Y LAS CONSECUENCIAS DEL ACTUAR DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES PRODEMOCRÁTICAS

Las organizaciones civiles son “agrupamientos estables, organizados, con una estructura de relaciones, con reglas de funcionamiento, con objetivos relativamente estables, que tienden a profesionalizar las acciones que realizan y que, en la mayoría de los casos, cuentan con personalidad jurídica” (Canto, 2004, p. 60). Forman parte de lo que se conoce como sociedad civil organizada, la cual no tiene una composición fija o permanente, sino que va cambiando de acuerdo con las nuevas problemáticas que ocurren en el contexto sociopolítico y económico y ante las cuales las personas y comunidades generan nuevas respuestas para afrontarlas a lo largo de la historia concreta de un país, región o ciudad. Dentro de ella pueden identificarse asociaciones gremiales, asociaciones políticas formales, grupos de matriz religiosa, organizaciones comunitarias o vecinales, agrupaciones culturales y deportivas, colectivos definidos por su identidad étnica o de género, agrupaciones asistenciales y de beneficencia, diversidad de colectivos organizados en torno a alguna identidad o proyecto y organismos civiles prodemocráticos que buscan cambios en ese sentido en el régimen político, así como en la promoción y el ejercicio de derechos ciudadanos.

En conjunto, las organizaciones ciudadanas pueden contribuir en la conformación de un movimiento social, que abarca las diversas acciones colectivas encaminadas a cambiar una realidad (Olvera Rivera, 2004). Si, como dice Touraine (1995), los movimientos sociales producen sociedad, también las organizaciones civiles, en conjunto y en lo individual, dan su aporte en la modelación de la sociedad y de los futuros sociales.

¿Cómo se produce sociedad? A través de acciones y discursos que impactan en las decisiones políticas, pero también con estrategias que inciden en las mentalidades y las subjetividades de la gente, ya sea para mantener la hegemonía ideológica de grupos poderosos o para que las personas se construyan como sujetos y actores de su propia vida (Gallardo, 2005). Por lo tanto, la sociedad se produce mediante distintas formas de incidencia en los más variados campos de la vida, por lo que no queda limitada a la política institucional ni a la protesta u oposición, sino que incluye transformaciones en las mentalidades, las prácticas cotidianas y en el espacio público, los impactos culturales y los cambios personales (Pleyers y Álvarez-Benavides, 2019).

Las organizaciones civiles “están compuestas por gente, personas que actúan, se mueven, que hacen política y se politizan [...]. Son ocurrencias creativas que abren nuevos espacios públicos y a través de las cuales, los individuos pueden reinventarse y reinterpretar el mundo en el que viven” (Eyerman, 1989, cit. en Revilla, 2002, p. 33). Operan en el espacio político-cultural confrontando valores y prácticas del orden establecido para transformar aspectos de la vida social relativos a la defensa y el ejercicio de derechos y la ampliación de los repertorios de participación política (Olvera Rivera, 2004). Algunas de estas organizaciones comparten planteamientos propios de lo que Dagnino *et al.* (2005) llaman proyecto democrático participativo, como es la apropiación de las nociones de ciudadanía y democracia, la puesta en práctica de formas nuevas de intervención en asuntos públicos, la introducción en la discusión social de más participantes y de temas nuevos, la difusión de la convicción del derecho a tener derechos, la lectura social y política de la vida cotidiana.

La transformación de la realidad que se proponen muchas organizaciones civiles puede traducirse en cambios en legislaciones y políticas públicas; este podría ser el impacto más evidente. Sin embargo, hay incidencias que se producen en otros ámbitos como es la puesta en práctica de formas nuevas de convivencia social, la transformación de subjetividades mediante el descubrimiento y desarrollo de capacidades para autoconstituirse como sujetos de su propia vida y del mundo. Estas incidencias, más allá de la esfera institucional del poder, son formas no políticas de hacer política (Cahuich, 2004).

Zarco y Reygadas (2002) proponen tres dimensiones de la incidencia de las organizaciones ciudadanas en el espacio público: la cultural, la política y la de las políticas públicas. En el espacio cultural, la incidencia tiene que ver con la construcción de significados comunes entre los activistas. En la política, se trata de influir en las estructuras y normas que modelan la convivencia y la toma de decisiones. En las políticas públicas, inciden para que los programas gubernamentales atiendan necesidades sociales, incluyan sectores excluidos y democratizen la forma en que se gestionan. La articulación de estas tres dimensiones favorece “una democratización integral de las relaciones gobierno-sociedad y de las relaciones sociales mismas” (2002, p. 21). Desde una perspectiva más amplia, estas influencias en ámbitos concretos de la vida social y personal van encaminadas también al impulso de cambios estructurales o a la búsqueda de nuevos modelos alternativos de sociedad y de valores contrapuestos al individualismo imperante.

Ahora bien, cuando las organizaciones civiles convergen con otros esfuerzos individuales y colectivos de forma duradera y conforman movimientos, las consecuencias de su actuar contencioso siguen más o menos las mismas líneas. Si bien las instituciones contribuyen a moldear a los movimientos y a sus actores, estos también, gracias a sus estrategias y formas de movilización, pueden ser fuerzas causales con un impacto importante, aunque usualmente no sean las dominantes o principales. Algunas observaciones notables en el estudio de la incidencia de estas, producto del registro de literatura en el campo (Amenta *et al.*, 2019), consisten en considerar que los actores colectivos pueden tener un impacto significativo, incluso cuando no logran alcanzar sus metas, que aun cuando sean exitosos pueden provocar consecuencias insignificantes o pequeñas y que sus consecuencias políticas, aunque sean relevantes, no generan, muchas veces, la suficiente atención en sus participantes.

Para Amenta *et al.* (2019), entre las áreas de interés de los movimientos están las instituciones políticas, la democratización, los partidos políticos, las elecciones o los procesos legislativos. Pero el que sean de su interés no quiere decir que ellas sean producto o resultado de los movimientos, ya que existen múltiples factores que las producen; principalmente, estos aspectos y procesos políticos serían ámbitos de la política que los movimientos y sus organizaciones buscan influir. Entre los medios para hacerlo, los movimientos emplean la negociación, el acceso político, la protesta, la disrupción, la captación de la atención pública, la elaboración de demandas, la participación directa en los procesos, entre otras estrategias. Finalmente, en su incidencia política, cabe resaltar que es central el contexto en el que juegan los

movimientos, razón por la cual hay que prestarle mucha atención al momento de dar cuenta de las consecuencias y resultados de las movilizaciones.

Otras de las consecuencias centrales de las acciones de los movimientos y sus organizaciones son aquellas de carácter cultural. Según Van Dyke y Taylor (2019), para muchos movimientos, los cambios culturales resultan ser los efectos más significativos y durables, en especial cuando consideramos que muchos de ellos fallan en alcanzar sus objetivos explícitamente políticos. Entre sus resultados culturales, los movimientos cambian conciencias, prácticas e identidades, crean redes y comunidades, transforman aspectos más amplios de la cultura, generan públicos y ponen en la agenda temas y preocupaciones, elaboran nuevos discursos, permiten nuevas conexiones, coaliciones, líderes y activistas.

De acuerdo con las mismas autoras, los movimientos generan consecuencias culturales internas, que afectan principalmente a sus participantes, y externas, las cuales inciden en la cultura más allá del movimiento. Como sucede con los efectos políticos, muchas veces los culturales también son inintencionados. En especial, cabe resaltar que el trabajo cultural de los movimientos sobre las identidades individuales y colectivas posibilita que los grupos en desventaja o estigmatizados obtengan reconocimiento e incrementen su estatus, señalan las autoras (Van Dyke y Taylor, 2019).

Como anotamos párrafos arriba respecto a las organizaciones, en los movimientos, las consecuencias biográficas también son aspectos notables como resultado de la vida asociativa. De acuerdo con Passy y Monsh (2019), participar en grupos contenciosos socializa y resocializa a las/los activistas, en la medida que sus cosmovisiones y comportamientos son sujetos de transformación. Para las autoras, los efectos en la personalidad pueden afectar ámbitos sociales más amplios, ya que las personas activas interactúan con otras más allá del movimiento. El involucramiento en la movilización moldea las mentalidades de la gente, afecta sus prácticas; estos cambios no solo se ciñen al aspecto político de las biografías personales, sino que se extienden a otras esferas vitales como la familiar, la laboral y de amistad. Participar implica, por supuesto, conformar la identidad personal, incrementar habilidades, ampliar las capacidades relacionales, cambiar el comportamiento, incluso transmitir aspectos valiosos producto del involucramiento de nuevas generaciones de personas, destacan estas autoras.

A partir de esta revisión general de las formas de caracterizar la actuación y la incidencia de las organizaciones civiles, en este trabajo analizamos las acciones de dos asociaciones de Nuevo León de finales del siglo XX, enfocando el interés en la influencia ejercida en cuatro ámbitos: social-comunitario, cívico, político institucional y subjetivo. Este planteamiento se realizó desde la rememoración de experiencias

por parte de activistas. Nos concentramos en este periodo porque, como se indicó en la introducción, se trata de una etapa acerca de la que son escasos los estudios disponibles. De manera que la recuperación de estas experiencias contribuirá a llenar parte de ese vacío en la literatura sobre el activismo ciudadano en Monterrey y podrá servir de insumo para posteriores investigaciones sobre la evolución de la acción colectiva de las organizaciones prodemocráticas en esta región de México.

METODOLOGÍA

El trabajo con narrativas resulta una herramienta metodológica valiosa para la comprensión y explicación de un gran número de problemas sociales; entre ellos, por supuesto, el de la acción colectiva y los procesos de democratización. De acuerdo con Griffin (1993), las narrativas son constructos analíticos que unifican un conjunto de acciones y hechos pasados o presentes, que de otra forma podrían verse como discretos o separados, en un todo relacional y coherente que otorga un significado a cada uno de sus elementos y que es constituido al mismo tiempo por ellos. Como es previsible, las narrativas tienen un principio y un final al que se llega de manera no arbitraria, término que es el resultado de la concatenación lógica y deliberada de acciones y eventos construida por quien narra. Al estar centrada en la acción social y su temporalidad, la narración promete un conocimiento teórico profundo acerca de la constitución mutua del juego entre agencia y estructura, una dinámica que ocurre continuamente en el tiempo y a través del tiempo.

Griffin menciona (1993) que las explicaciones narrativas toman la forma de historias con finales abiertos, fraguadas por contingencias y coyunturas, en las que lo que sucede, una acción, ocurre de hecho por su posición dentro de la historia. En las narrativas podemos ver cómo la acumulación de consecuencias de acciones pasadas constriñe de modo incremental y limita la acción futura (Griffin, 1993). Pese a su potencial explicativo, el trabajo con narrativas supone algunas limitaciones dignas de consideración metodológica. Una de ellas se refiere a la ilusión biográfica, es decir, la aceptación acrítica de la narración como verdadera o verosímil, sin ninguna verificación. Por otra parte, la ordenación cronológica de las narraciones no necesariamente sugiere significancia causal o histórica, señala Griffin (1993). La explicación sociológica, por lo tanto, requiere que las acciones, los eventos y sus contextos estén explícitamente teorizados y que las conexiones causales entre secuencias narrativas se establezcan de tal forma que puedan ser replicadas y criticadas.

En nuestro caso, la teorización que realizamos previamente, atenta al contexto en el que transcurren las acciones de integrantes de organizaciones civiles prodemocráticas en Nuevo León, permite rastrear, contrastar y presentar las narraciones de nuestros actores y actrices de acuerdo con las siguientes consideraciones, las cuales buscan dotar de significación y verificación a los relatos. Para identificar las incidencias de las organizaciones estudiadas, interrogamos a los informantes acerca de sus actuaciones individuales y colectivas en diferentes campos: el social-comunitario, que involucra la generación de prácticas solidarias para atender demandas sociales, así como la generación de interés por participar en el cambio de las condiciones sociales y políticas del entorno; el cívico, que se refiere a las oportunidades de participación y capacitación que ofrece la organización a sus integrantes y a las personas interesadas en involucrarse en el activismo, a la promoción y fortalecimiento de otros grupos y colectivos civiles, a la creación de vínculos organizacionales locales, nacionales y globales; el político institucional, que incluye el involucramiento en el proceso en que se negocia el poder, abarca el impulso de iniciativas legales para democratizar el régimen, comprende acciones para ampliar la participación política, implica la introducción en la agenda pública —legislativa y gubernamental— de las demandas sociales, busca la influencia tanto en el diseño como en la ejecución de políticas y programas públicos y exige cuentas a los poderes públicos sobre sus acciones y decisiones; el subjetivo, que tiene que ver con las experiencias de la persona en su autoconstitución como sujeto de la propia vida y del mundo.

La selección intencional de las personas entrevistadas, quienes narraron sus experiencias e historias guiadas por las consideraciones referidas, que abarcan tanto el contexto contencioso de sus acciones como el aspecto vivencial subjetivo, exige esclarecer criterios relativos al trabajo con muestras pequeñas. Para empezar, trabajamos pocos casos porque el contexto político y cultural específico compartido por las organizaciones es prácticamente el mismo y porque la experiencia de las personas entrevistadas, muchas de ellas fundadoras de esos esfuerzos contenciosos, es similar, lo que en ambos criterios supone cierta homogeneidad relativa al trabajo político que produjo la incidencia organizativa. Se planteó entonces un estudio de dos casos con el propósito metodológico de comprender las percepciones y experiencias políticas y de socialización comunes de individuos pertenecientes a organizaciones relativamente homogéneas entre sí en un contexto político muy particular —el de la transición política en Nuevo León—, abordadas desde un interés teórico acotado —el aspecto de la incidencia organizacional—.

Bajo estas consideraciones, señalamos que dicha homogeneidad, trabajada desde la centralidad de nuestros supuestos teóricos, relativos al análisis de experiencias comunes, permitió la saturación metodológica con muy pocos casos (Guest *et al.*, 2006). Asumimos, por otra parte, el riesgo que supone que la selección intencionada de las personas y las organizaciones pueda introducir problemas relativos al alcance de las inferencias producto del trabajo empírico, así como la posibilidad de sobreestimar los hallazgos de casos acotados, que muchas veces pueden estar por fuera de la media de contextos más amplios y heterogéneos (Collier y Mahoney, 1996). En específico, resaltamos que las historias y experiencias narradas por las/los participantes de las asociaciones que operaron en Nuevo León durante la última década del siglo XX no son representativas de todo un proceso político y cultural, sino propias de un sector muy acotado con acciones dentro de dicho proceso.

La misma validez conceptual no proviene de la atención a la heterogeneidad de todo el espectro civil organizativo, ya que está basada, en nuestro caso, solo en la incidencia de un tipo especial de organización contenciosa en la entidad. Dicho esto, las entrevistas, realizadas entre septiembre y octubre de 2018, tuvieron como objetivo conocer las prácticas que configuraron a parte de la sociedad civil organizada, a través de la rememoración y punto de vista de los activistas acerca del quehacer de estas organizaciones, su valoración de la incidencia y los significados que para ellos tuvo su involucramiento en la acción social organizada en una época en la que apenas florecían en la capital neolonesa las entonces llamadas organizaciones no gubernamentales.

Así, nuestro muestreo por adecuación (O'Reilly y Parker, 2012) nos permitió atender las preocupaciones centrales de la investigación, relativas a la relación entre las formas intencionadas de narrar y las transformaciones biográficas, políticas y culturales dadas por esfuerzos personales y colectivos contenciosos que, en distintos campos de acción, contribuyeron a cambiar mentalidades, agendas, prácticas y concepciones político-culturales fraguadas en las luchas por la democratización en Nuevo León. Las narrativas de las/los participantes brindaron la suficiente riqueza para reconstruir experiencias e incidencias acotadas dentro de un proceso político general, el cual influyó también en la conformación de las organizaciones y sus integrantes. En este sentido, la validez conceptual obtenida provino de la reconstrucción y la presentación de las realidades organizativas narradas por nuestros informantes, lo que implicó la atención a la representación y la credibilidad de las realidades vividas por ellas/ellos en un fenómeno social particular (Creswell y Miller, 2000).

Finalmente, señalamos que, como medio para el contraste y la verificación de la veracidad de muchos hechos nodales presentados en los relatos, se optó por

complementar el análisis de las entrevistas con la consideración de estudios académicos y de otras fuentes informativas acerca del panorama político, económico y cultural de la etapa de la transición en la entidad, así como de fuentes primarias producidas por estas mismas agrupaciones en sus años contenciosos de mayor actividad.

BREVES NOTAS DEL CONTEXTO DE LAS ORGANIZACIONES ESTUDIADAS

A partir de finales de la década de 1980, Monterrey registró un cambio en las bases de su desarrollo económico, que hasta entonces se fundamentaba en un sector industrial local próspero, para pasar a transnacionalizarse y, además, ampliar el rol del sector de servicios. En esta transformación tuvieron un papel combinado determinante el impacto de la crisis de 1982, que incrementó la deuda de las empresas dejándolas con menos capacidades para afrontar la apertura comercial, y la imposición del neoliberalismo como enfoque dominante de la acumulación capitalista, que implicó que el Estado redefiniera su papel en la economía, así como profundizar la vinculación del proyecto de desarrollo a las exigencias de los mercados internacionales, en detrimento del mercado interno. En el ámbito local, uno de los impactos de esta inserción en los procesos de globalización económica y financiera significó el establecimiento de alianzas entre industriales regiomontanos y socios extranjeros; en algunos casos, estos últimos llegaron a convertirse en accionistas mayoritarios de grandes empresas que otrora habían constituido cuasisímbolos de un boyante emprendedurismo local.

En el trasfondo de esa transformación económica ocurrió también la consolidación del proceso de metropolización, que integró espacialmente nueve municipios: Monterrey, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina, Apodaca, General Escobedo, Juárez y García. Estos concentraban entonces el 86 por ciento de la población de Nuevo León. En 20 años, la población metropolitana creció un 300 por ciento, para pasar de un millón noventa y nueve mil habitantes, en 1980, a tres millones cuatrocientos mil, en el año 2000.

El acelerado crecimiento económico (López-Villafañe, 2007) y demográfico, en el marco de la profundización del modelo neoliberal, agravó la marginación y desigualdad en la urbe regiomontana: incremento de la brecha de ingresos entre los sectores laborales más profesionalizados y los menos calificados (Aguilar y Escamilla, 2000), disminución de los salarios, aumento de la precariedad laboral y desprotección de

los trabajadores en lo relativo a seguridad social, expansión de la economía informal (Rodríguez y Kinto, 2010), mayor inequidad en el acceso a la educación, sobre todo en los niveles medio superior y superior (Villarreal Martínez *et al.*, 2013).³

Mientras en el entorno económico y social ocurría la paradoja del crecimiento con mayor desigualdad, en el ámbito político de Nuevo León se consolidó un marcado bipartidismo, protagonizado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN). Ya desde los años 80, los empresarios habían ingresado a la política institucionalizada militando en partidos, para desde ahí “imponer, por una nueva vía, sus intereses económicos y de clase” (Ortega Ridaura, 2007, p. XII). Sánchez Munguía (2007) explica que los empresarios regiomontanos buscaban el cambio de régimen político por dos vías: el fortalecimiento de la sociedad civil y el fortalecimiento del sistema de partidos. En la primera vía, algunos empresarios simpatizantes del PAN impulsaban campañas de educación cívica y hacían llamados a votar y defender el sufragio. En cuanto a los partidos, varios empresarios entraron a militar tanto en el PRI como en el PAN en busca de candidaturas y, luego, cargos de elección popular: diputaciones, senadurías, alcaldías y también la gubernatura.

En el primer lustro de la década de los 90, en los gobiernos locales de los municipios metropolitanos de San Pedro Garza García, Monterrey y Guadalupe se registró la alternancia del PRI al PAN. En tanto, en García se llevó a cabo una movilización postelectoral que duró varios años, encabezada por militantes y simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD). No fue hasta 1997 cuando ocurrió la alternancia en la gubernatura de Nuevo León, que desde el periodo posrevolucionario había sido ocupada por políticos del PRI. Ese año, los resultados electorales le dieron el triunfo a un empresario militante del PAN, Fernando Canales.

En cuanto a la acción social organizada, el movimiento urbano popular había sido desarticulado en la década anterior mediante represión y cooptación. A partir de entonces surgieron movimientos ciudadanos, pero sin la misma amplitud y fuerza que los anteriores (Pozas Garza, 1995). Ante la ausencia, por derrota o

³ Shefner y Stewart (2011) sostienen la tesis de que los agravios y privaciones producto del neoliberalismo detonaron coaliciones multiclasistas, que trabajaron por primera vez juntas para pedir un cambio político ante la incapacidad del Estado mexicano para detener y paliar los efectos de la crisis. Para los autores, las demandas por la democratización fueron la fuerza unificadora principal de esas alianzas, las cuales, dado su mismo carácter policlasista, terminaron por lograr cambios poco sustantivos, más allá del ámbito electoral. En el caso de Monterrey, en atención a esta tesis, podemos decir que la alianza entre clases medias y vulneradas cuestionó la incapacidad del poder protector paternalista del Estado y del empresariado, conduciendo también el descontento hacia la lucha política, aunque los logros sustantivos fueron asimismo muy pocos. La clase media, en aras de conservar o recuperar sus privilegios, tendió más a peticiones reformistas y paternalistas a través de su organización civil.

subordinación, de movimientos populares o sindicales que plantearan demandas generales, los nuevos grupos civiles nacieron atomizados, con una membresía reducida y escasos recursos materiales. No obstante, los esfuerzos realizados por estos colectivos “tienen el valor que la propia historia de subordinación y cultura individualista le debe reconocer” (Villarreal Martínez *et al.*, 2013).

Brumley (2001) afirma que las organizaciones civiles en Nuevo León a finales del siglo XX eran escasas y se desarrollaron de manera diferente al resto del país. Una de las posibles razones de la menor presencia y visibilidad de los grupos civiles en ese tiempo es la prevalencia de una “cultura de trabajo de colaboración subordinada” (Palacios, 2007, pp. 166 y 169) a las élites, que puso en el centro de la vida social el trabajo como actividad superior y excluyente de otras, incluida la política. Además, la intervención de las élites en situaciones de crisis (como el paso del huracán Gilberto en 1988) impidió la generación de dinámicas organizativas autogestivas de la sociedad.

La influencia de la alta burguesía regiomontana se ha considerado tan importante que Amores (2007) asegura que esta “ha ejercido el papel de señalar, dictar y regular normas no escritas para el comportamiento de la sociedad” de Monterrey (p. 79). Aun así, en el primer lustro de la década de 1990 se produjo el florecimiento de algunas organizaciones civiles con un perfil prodemocrático, con la conformación de un asociativismo cívico, que surgió al margen de las tres estructuras principales de poder identificadas por Brumley (2001): la burguesía industrial, la Iglesia católica y el PAN.

No hay un número exacto de los grupos civiles con agendas relacionadas con la democracia que había en Nuevo León en los 90. El directorio publicado en 1997 por Promotores Populares de Monterrey José Llaguno, A. C., enlista 59 organizaciones y grupos en la entidad que, según se afirma en la contraportada, “trabajan desde distintos frentes por construir la democracia” (Promotores Populares de Monterrey, 1997); además, aclara que el directorio “no puede ser definitivo ni exhaustivo” (1997, p. 20), ya que es posible que entonces hubiera más grupos de los que no se tenía noticia y que “no incluye a los llamados movimientos y organizaciones populares que son mucho más amplios y cuya naturaleza no es propiamente la de un organismo civil” (1997, p. 20).

Los grupos ciudadanos conformados a principios de los 90 se integraron por participantes de algunos de los movimientos sociales y eclesiales que habían tenido auge en las décadas de los 70 y 80 (autonomía universitaria, solidaridad con las revoluciones centroamericanas, protestas contra el fraude electoral de 1985, comunidades

eclesiales de base) y por individuos que se sintieron interpelados por las movilizaciones prodemocráticas que en ese tiempo ocurrían en varias partes del país.⁴

En los sectores populares de Monterrey y su área metropolitana, a finales de los 80, algunos integrantes de las comunidades eclesiales de base (CEB) y participantes de luchas obreras y estudiantiles anteriores buscaron otras opciones de activismo fuera de los ámbitos religioso, sindical y partidista y crearon grupos con una identidad ciudadana (Martínez Canizález, 1999) para trabajar en lo tocante a desarrollo comunitario, educación cívica y para colaborar en las primeras experiencias de observación electoral en otros estados (San Luis Potosí en 1991, Chihuahua y Tamaulipas en 1992). Los nuevos colectivos se identificaban a sí mismos como organizaciones no gubernamentales; algunos formalizaron su existencia adoptando la figura legal de asociación civil; utilizaban como herramienta de trabajo la educación popular; buscaban mantener relación con organismos nacionales y vincularse con los temas de la agenda ciudadana nacional (Promotores Populares de Monterrey, 1992).

De este conjunto diverso de asociaciones, en este trabajo nos enfocamos en dos organizaciones que iniciaron su trabajo en la última década del siglo XX en el área metropolitana de Monterrey: Promotores Populares de Monterrey José Llaguno, A. C. (en adelante, Promotores Populares) y Alianza Cívica Nuevo León, A. C. (en adelante, Alianza). Las dos asociaciones coinciden en el perfil prodemocrático y en su origen independiente de instituciones partidistas, eclesiásticas o empresariales; realizaron su trabajo con agendas propias que coincidieron en algunas coyunturas como la observación de procesos electorales y la participación en movilizaciones nacionales por la democracia y la paz.

ACCIONES E INCIDENCIAS DE ORGANISMOS CIVILES PRODEMOCRÁTICOS EN MONTERREY

Con base en las entrevistas realizadas y la revisión documental, en este apartado se exponen las acciones emprendidas en la última década del siglo XX por las dos organizaciones estudiadas, identificando en cada caso las incidencias en los ámbitos social-comunitario, cívico y político-institucional. En otro apartado se presentará lo tocante a la incidencia en las vidas de las personas activistas entrevistadas.

⁴ Algunas de esas movilizaciones son la Marcha por la Dignidad, que salió de San Luis Potosí a la Ciudad de México en 1991; el Éxodo por la Democracia, que salió de Tabasco hacia la capital del país en 1991; la marcha indígena Xi'Nich, de Palenque a la capital en 1992; las marchas y plantones de productores rurales de El Barzón en diferentes partes del país entre 1993 y 1994; el surgimiento del movimiento indígena zapatista en Chiapas en 1994.

Promotores Populares de Monterrey José Llaguno, A. C.

Esta agrupación se conformó en julio de 1989 y se formalizó como asociación civil en diciembre del mismo año. Durante los primeros 10 años, sus oficinas cambiaron varias veces de ubicación en distintas colonias del área metropolitana de Monterrey. Estas eran costeadas por los mismos integrantes y, a veces, compartía la renta con otros colectivos, hasta que, alrededor de 1994, se asentó en un local colindante con la capilla de Santa Isabel, en la colonia Villa Olímpica, en el municipio metropolitano de Guadalupe, donde permaneció varios años. Ya en el siglo XXI, la organización dejó de tener oficinas fijas a causa de la falta de recursos. En los primeros 10 años, la agrupación trabajó asuntos relacionados con salud popular, educación ciudadana, promoción de la democracia; después mantuvo solamente la línea de salud popular.

Nace como una organización de inspiración cristiana, pero independiente de lo eclesástico; quiere ser una entidad laica que, con inspiración cristiana, quiere tener un mayor grado de incidencia. Así fue como recuerdo que la hayamos concebido, ¿verdad? Entonces sus líneas, así como ejes temáticos o estratégicos, eran la formación ciudadana, la incidencia social y política, la vinculación de comunidades de base con movimientos de sociedad civil (Luis Eduardo Villarreal Ríos, comunicación personal, 2018, octubre 4).

En el ámbito social-comunitario, Promotores Populares utilizó la estrategia de la educación cívico-política, que llevó a cabo mediante la metodología de la educación popular, en colectivos que tenían o habían tenido una relación con las CEB, donde habían participado en actividades solidarias y de formación social. Es difícil separar la influencia de la experiencia previa en las CEB en el trabajo educativo emprendido por esta organización. Sin embargo, la parte cívico-política de la formación es propia de Promotores Populares más que de las CEB, debido a las restricciones institucionales a que estas se encontraban sometidas. Una de las participantes, que inició tomando los talleres de análisis de la realidad y que posteriormente se convertiría en promotora, consideró que la organización era una oportunidad para involucrarse en la vida política.

Pues yo creo que Promotores fue como lo único que había, yo creo, ¿verdad?, aquí, en esta ciudad, lo único que había para poder desde ahí plantearse, aprender y luego participar en lo que era la vida política de este país. Sí, sí, yo no recuerdo que hubiera otra organización así como Promotores (Olivia Torres Hernández, comunicación personal, 2018, octubre 5).

Uno de los fundadores de la organización detalló la estrategia de capacitación:

Había tres niveles de formación: uno primero era el sujeto social, la idea era formar al sujeto social; luego, otro nivel más avanzado, que era el sujeto popular, y finalmente, el sujeto político. Bajo esa modalidad estuvimos trabajando en el 90, organizamos algunos talleres de análisis de la realidad, sobre todo nos interesaba mucho la cuestión local; en años anteriores, cuando trabajábamos en las CEB, promovimos mucho la solidaridad con Centroamérica. Ahora, en Promotores nos interesaba incidir en lo local, entonces hicimos mucho énfasis en realizar análisis de coyuntura a nivel local, análisis histórico también (José Luis Martínez Canizález, comunicación personal, 2018, octubre 4).

A la acción de educación cívico-política se agregaba la capacitación en la utilización de la herbolaria para atender necesidades de salud comunitaria:

Sí, pues era, pues, un seguir creciendo, acompañar a los grupos, empararse uno de más conocimientos y de formación tanto política como cultural, porque Promotores no nada más era una formación cívica la que se llevaba ahí, también había grupos de participación en herbolaria, en elaboración de algunos productos que la gente y las señoras podían hacer; era como el objetivo estar presente en cosas y necesidades del pueblo (Olivia Torres Hernández, comunicación personal, 2018, octubre 5).

La capacitación de promotores de salud fue una actividad permanente mezclada con la educación popular enfocada al análisis de la realidad política y social. Uno de los fundadores de la organización estimó que en la esfera comunitaria la promoción de la salud es uno de los impactos más importantes que todavía perdura.

Por ejemplo, ahora es muy común que se ofrezcan talleres de salud popular acerca del uso de las plantas medicinales, jabones, pomadas; pero, en su momento, yo creo que Promotores fue pionero en ofrecer esos talleres y formar promotores de salud. O sea, creo que todavía existen en diversos lugares del área metropolitana gente que se formó en Promotores como promotor de salud; eso fue importante (José Luis Martínez Canizález, comunicación personal, 2018, octubre 4).

Desde sus inicios, la actuación de la organización estuvo marcada por la escasez de recursos financieros.

El problema con el que nos enfrentamos siempre es que nuestro trabajo, como era más en la parte educativa, ideológica, política, era difícil de financiar. Es decir, no había en esos momentos una conciencia de que la democracia mereciera recursos por parte de las financiadoras, porque ellos querían proyectos con impactos sociales tangibles, inmediatos y cuantificables (José Luis Martínez Canizález, comunicación personal, 2018, octubre 4).

Así, la realización de talleres de análisis de la realidad y de herbolaria y la operación de la organización eran solventadas con los recursos de los mismos activistas. Los escasos recursos que obtuvieron de algún programa público o de donantes privados se destinaron a proyectos no directamente relacionados con formación política, pero sí con impactos visibles en la comunidad. La organización abrió oportunidades laborales mediante la creación de un taller de serigrafía en 1996, con el financiamiento inicial de la Secretaría de Desarrollo Social Federal, que constituyó un proyecto productivo de apoyo para un grupo de mujeres de la colonia Villa Olímpica, que siguió trabajando por cerca de 10 años generando ingresos para estas mismas mujeres y sus familias. En 1996, con el apoyo de un microempresario local, se equipó una cocina comunitaria, en esa misma colonia, que funcionó como comedor popular gratuito, administrado por un grupo de mujeres de la misma comunidad que participaban en talleres de educación popular.

En esa primera década de trabajo, las personas informantes refirieron que Promotores amplió su trabajo hasta algunas comunidades rurales del sur de Nuevo León, en los municipios de Doctor Arroyo y Mier y Noriega, donde formaron promotores de salud y, al mismo tiempo, utilizaron la estrategia de educación popular para la formación cívico-política a partir del análisis de la realidad. También en esos años, la agrupación trabajó en la ejecución parcial de algunos programas en los municipios de Santa Catarina y Apodaca impartiendo de forma voluntaria cursos de salud alternativa en colonias populares. Esta experiencia brindó la oportunidad de entablar contacto con otros grupos sociales.

La participación en redes nacionales y el impulso de una red de grupos civiles locales son parte de la incidencia cívica de la organización. En los primeros años formó parte de la Red de Escuelas de Promotores Populares, que operaba en el Valle de México, Sinaloa y Morelos. En 1992 se adhirió a la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, una red creada en 1990, en la que participaban 120 organizaciones de diferentes partes del país. Estos vínculos facilitaron el involucramiento en asuntos de la agenda ciudadana nacional, con lo que se llevaron al espacio local campañas relacionadas con democracia, derechos humanos y paz.

En 1992, Promotores Populares impulsó en el nivel local la formación de la Red por la Democracia, “como un frente ciudadano neolonés, no partidista, abierto y plural, para luchar por la instauración de la democracia en el país” (Promotores Populares, 1993). A esta Red se sumaron la Unión de Colonos y Solicitantes de Terrenos Avance Popular de García, N. L., Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), grupos de salud de la parroquia Santa Rosa de Lima de la colonia Niño Artillero, grupos de salud de la colonia Canteras, Servicios Sociales Solidarios Ymelda Tijerina (SSSYT), Grupo de Teatro Popular Ventana Abierta, Centro de Estudios Regionales (CER) de Linares, Grupo de los 500, Comité Independiente Zertuche, Equipo Promotor de Pastoral Social de la Parroquia Cruz del Apostolado de la colonia Villa de San Miguel. Esta Red por la Democracia, que solo se mantuvo activa por un año, llevó a cabo acciones de incidencia política como la elaboración y presentación al Congreso del Estado de una iniciativa de Ley Estatal Electoral (Jalomo, 1993; Red por la Democracia, 1993). En enero de 1994 convocó a la creación del Comité Neolonés de Apoyo al Pueblo de Chiapas y en abril a la formación de la expresión local de Alianza Cívica.

Alianza Cívica Nuevo León, A. C.

Esta organización se conformó en abril de 1994 para llevar a cabo, en el ámbito local, los trabajos de observación electoral de los comicios presidenciales federales de ese año por la red Alianza Cívica Observación 94, creada en la Ciudad de México por iniciativa de siete asociaciones ciudadanas prodemocráticas.⁵ En un primer momento, la incidencia social de la Alianza Cívica Nuevo León se manifestó en que esta se constituyó como un espacio abierto a la participación cívico-política de personas que no lo habían hecho antes y en que sirvió de vínculo entre diferentes organizaciones civiles para un mismo proyecto, que fue la observación electoral en 1994 en la entidad: “ese proyecto nos acercó casi a 600 personas, más de 600 personas que participaron como observadores, equipo de apoyo, un montón de gente, centros de enlaces telefónicos...” (José Antonio Martínez Sánchez, comunicación personal, 2018, octubre 28).

En un primer momento, la incidencia cívica se expresó en la facilitación de vínculos para la acción en el espacio público, además de la capacitación en materia

⁵ Academia Mexicana de Derechos Humanos, Acuerdo Nacional para la Democracia, Consejo por la Democracia, Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, Fundación Arturo Rosenblueth, Movimiento Ciudadano por la Democracia y el Instituto Superior de Cultura Democrática.

electoral de cientos de personas que colaboraron en los trabajos de observación en casillas, monitoreo de medios de comunicación y seguimiento a consejos electorales distritales.

La realización de estos programas implicó el emprendimiento y la puesta en juego de conocimientos y capacidades especializados, además del desarrollo del trabajo con rigor para que los resultados fueran creíbles. En el caso del monitoreo de medios, por ejemplo, un participante narra lo siguiente:

En esta comisión, en la que estuvimos más inmiscuidos, tuvimos muy buenos resultados porque era monitoreo de televisión, lo cual para los años 90 implicaba pues una tecnología tanto estadística como técnica, que no era fácil conseguir. Entonces se solucionó de una manera digamos... alguien, un colega mío del periódico *El Porvenir* —yo estaba en *El Norte*, él estaba en *El Porvenir*—, alguien fue a México a capacitarse en esta cuestión del manejo del SPSS. En particular recuerdo dos o tres chicos de preparatoria que codificaban de una manera impresionante, no se equivocaban, habían entendido todo el manual de código (José Juan Olvera Gudiño, comunicación personal, 2018, octubre 2).

En la incidencia política, Alianza Cívica contribuyó a que iniciativas nacionales de observación electoral tuvieran también una expresión local, al igual que los ejercicios de consulta ciudadana efectuados en los siguientes años sobre diversos temas: la consulta nacional sobre la realización de un juicio a Carlos Salinas de Gortari (García, 1995); la Consulta Nacional por la Paz y la democracia convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y realizada por Alianza (Vela, 1995); el Referéndum por la Libertad “Por una estrategia económica alternativa para el desarrollo de México” (Juárez, 1995); la Primera Jornada Nacional de Condena a la Política Económica del Gobierno (Ávila, 1996), y la Consulta por la Propuesta Ciudadana para que los Diputados Sirvan y Hagan Leyes que Sirvan (Romo, 1997).

Desde sus inicios en 1994, las acciones de Alianza Cívica han sido llevadas a cabo por activistas voluntarios. Los escasos recursos que eventualmente llegaban a esta organización se vincularon a algún proyecto específico y solo para cubrir parte de los gastos; el resto siguió siendo cubierto por la aportación voluntaria de quienes participaban de modo directo dando su tiempo, algunos materiales o aun dinero. Para la observación electoral, que convocó a más de 600 personas en 1994, el trabajo de logística y capacitación con escasos recursos salió adelante con el esfuerzo voluntario y las redes de amistad de los participantes directos:

El lugar donde era la sede de Alianza Cívica nos lo prestaban; al final sí se pagó algo porque ya después llegó un recurso de la ONU, que era nada más para la jornada electoral. Necesitabas, en aquel tiempo, televisiones y videocaseteras (para el monitoreo de medios), y por ahí le llamabas a alguien cerca, llegaba y me lo llevaba. Pero sí mucha gente aportaba. Entonces, en este sentido, sí era más o menos eso, todo mundo ponía para la comida, todo mundo ponía para algo; en realidad todos fusionamos todo (José Antonio Martínez Sánchez, comunicación personal, 2018, octubre 28).

El reconocimiento de que se es parte de un posible cambio social quizá sea lo que impulsa esta participación voluntaria, que puede llegar a ser intensa por la cantidad de tiempo y energía que se invierte.

Por ejemplo, para el caso de la consulta zapatista, si no estoy equivocado, hubo dinero de afuera—de los organizadores a nivel nacional—, pero nosotros también conseguimos dinero y, además, buena parte del trabajo que desarrollamos, pues era equivalente al dinero; o sea, de todo lo que hacíamos no pedíamos nada. No sé, era como muy apreciable la posibilidad de poder hacer esa consulta y conocer el resultado, y conocerlo rápido, y mostrar que podía generarse una tecnología ciudadana que en un mismo día pudiese como ofrecer un resultado a nivel nacional sin pasar por la mediación del gobierno o de un partido; era súper valioso. Entonces ahí había muchos recursos no monetarios implicados (José Juan Olvera Gudiño, comunicación personal, 2018, octubre 02).

Después de haber surgido como una red o espacio de vinculación de organizaciones en torno a la agenda electoral, Alianza Cívica se transformó en una asociación civil especializada en este tema; así fue como organizó la consulta ciudadana para elegir en 1997 a quien ocuparía la candidatura a la gubernatura de Nuevo León por la Coalición Democrática, integrada por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Verde Ecologista de México y la agrupación El Barzón, lo que implicó la instalación de 200 mesas en la entidad, atendidas por 900 personas, en las que participaron catorce mil electores (Ávila, 1997; García, 1997a; García, 1997b).

En el campo legislativo, la organización presentó propuestas de cambios a la Ley Electoral en cada ocasión que se abría en el Congreso el debate para la reforma en la materia. Sin embargo, el papel activo de Alianza en este campo no se tradujo entonces en la aprobación de sus propuestas. En 1998, la organización entregó al Congreso estatal la iniciativa llamada Ley de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social para el Estado de Nuevo León, que es una adaptación para la

entidad de la propuesta elaborada en el nivel federal por las redes civiles nacionales. Esta iniciativa no fue discutida ni dictaminada por los diputados, por lo que pasó a la “congeladora”. No fue hasta 2016 cuando la organización tuvo un éxito parcial con la aprobación y la publicación de la Ley Estatal de Participación Ciudadana, un asunto que desde hacía más de 10 años se había intentado introducir en la agenda del Congreso local.

La incidencia en la vida personal

Hasta aquí hemos revisado la incidencia social-comunitaria, cívica y política de estas dos organizaciones que surgieron casi al mismo tiempo en Nuevo León, entre finales de la década de los 80 y principios de los 90. Hay otro tipo de incidencia en el plano individual de los participantes que identificaron estas agrupaciones como un espacio donde podían involucrarse en el cambio social.

Más allá de que participáramos eventualmente en algún evento de los zapatistas en apoyo o de difusión, o etcétera, no estaba yo vinculado orgánicamente con nadie. Y entonces sí me sentía dentro de ese cuerpo de personas que desde la sociedad civil se preguntaban qué se podía hacer y si había una posibilidad de transitar a un cambio más o menos de relevancia, no quiero mencionar profundo, pero de relevancia, de manera pacífica, y cómo sería esto (José Juan Olvera Gudiño, comunicación personal, 2018, octubre 2).

Otra integrante de Alianza menciona:

A mí, más que nada, yo creo que lo que me motivó a seguir continuando participando, al menos fue porque tenía, y tengo todavía, la convicción de que para impulsar cambios democráticos está toda la cuestión de lo electoral, porque de ahí elegimos a quienes nos van a representar en el Congreso; fue cuando me empecé a involucrar y fui a observar cada sesión mensual de la Comisión Estatal Electoral (Lilia González Amaya, comunicación personal, 2018, octubre 28).

La participación en estas experiencias cívicas también dejó aprendizajes sobre asuntos como democracia, derechos humanos y justicia social, desarrollo de sensibilidad para conocer y tratar problemas reales y conflictos relacionados con esos mismos asuntos, también sobre trabajar en equipo, toma de decisiones, escuchar y dialogar.

Yo quería cambiar las cosas así de manera muy drástica, y me decían “no, no; a ver, cálmate”. Y sí, pues ya finalmente sí fui aprendiendo qué es realmente el diálogo, la negociación; es parte también para lograr cambios (Lilia González Amaya, comunicación personal, 2018, octubre 28).

El paso por alguna de estas organizaciones les brindó satisfacción y orgullo de haber participado en tareas relacionadas con la transformación de una parte de la realidad, lo que llevó a algunos de los participantes a impulsar después otros proyectos. Se trata de una herencia o legado que se transmitiría más adelante de diversas formas, como lo expresa un miembro de Promotores:

Yo creo que, en su momento, fue un afán muy genuino de articular fe y vida, articular inspiración cristiana con movimientos de la sociedad civil populares, un afán de formar nuestra conciencia más críticamente, más profesionalmente, yo creo que sí, entonces fue un esfuerzo muy válido que luego se... no que se haya diluido, sino que, pues, se ramificó en otras experiencias. Creo que es un legado de quienes hemos buscado la transformación social, desde nuestro modesto aporte (Luis Eduardo Villarreal Ríos, comunicación personal, 2018, octubre 4).

CONSIDERACIONES FINALES

Los grupos ciudadanos que surgieron en Nuevo León durante la última década del siglo XX no pueden ser estudiados como si se tratara de los movimientos sociales urbanos de décadas anteriores, ya que la forma de su integración, los temas que los movilizaron y las acciones que emprendieron son diferentes. Tampoco hay una ruptura total entre ambos estilos de organización y acción colectiva en Monterrey. Los movimientos urbanos, eclesial-populares, sindicales que tuvieron su auge en los años 70 y 80 pueden considerarse como los grupos solidarios preexistentes en los que se formaron algunos de los participantes e iniciadores de las organizaciones civiles revisadas en este trabajo.

Este bagaje de experiencias previas de acción colectiva organizada contribuyó a la modelación de la identidad de las asociaciones prodemocráticas, alimentada también de la creatividad para desarrollar nuevas formas de intervenir en el cambio social utilizando estrategias que van desde la educación popular hasta el uso de la estadística y herramientas tecnológicas disponibles en aquellos años.

La importancia de recuperar experiencias de activismo cívico radica en reconocer facetas de la sociedad neolonesa organizada que permitan reconstruir los hilos conductores de la acción colectiva, que va desde las vivencias de quienes han participado en los grandes movimientos sociales de los años 70 y 80 hasta las de los grupos menos numerosos y más dispersos como son las organizaciones civiles surgidas en la última década del siglo XX que buscaban cambiar realidades y crear sujetos políticos.

Las rememoraciones que han hecho las/los informantes son una reconstrucción desde el presente, más que un recuerdo (Barela *et al.*, 2009), que actualizan acciones y razones que configuran identidades y modos de ver el mundo. Estas narraciones están enmarcadas colectivamente en una visión de la sociedad como un espacio en el que se reconoce que hay juegos de poderes, pero que, por lo mismo, es posible cambiarla. En esas acciones, las personas participantes van descubriendo y desarrollando capacidades de convivencia, de influencia, de comunicación.

Las experiencias organizativas presentadas son parte de la historia del sector cívico organizado de Monterrey, conformadas al margen de las estructuras de poder político, económico e ideológico de la época. En el caso de Promotores Populares, aunque en los antecedentes de activismo de las personas entrevistadas figuran las comunidades de base eclesiales, esta organización ya no es un grupo eclesial, sino un colectivo ciudadano que crea su propia agenda de trabajo con intenciones de actuar en su espacio de influencia —que son los sectores económicamente deprimidos—, con una visión política enfocada en la incentivación del involucramiento de sectores sociales excluidos en la transformación de la realidad desde su propia experiencia y toma de conciencia como sujetos políticos con derechos. En el caso de Alianza, la pluralidad en la composición del grupo iniciador de este colectivo muestra la independencia con respecto de intereses partidistas. En ambos casos, las organizaciones surgen sin relación con la beneficencia privada de la época ni con el Consejo de las Instituciones de Nuevo León, creado por el empresariado en 1975 con el objetivo de “contribuir a la formación de un buen ciudadano para un mejor funcionamiento de la sociedad” (CCINLAC, 2019, p. 3).

Una línea de acción coincidente de ambos grupos es la democracia electoral, pero este asunto no agota sus respectivas agendas. Las coyunturas de los comicios propiciaron incluso el trabajo conjunto, aunque Promotores Populares precede a Alianza Cívica en las experiencias de observación electoral realizadas en el marco de iniciativas por organizaciones en otros estados. Sin embargo, la especialización del activismo en la búsqueda de incidencia en la democratización de los procesos electorales es evidente en Alianza Cívica. Promotores Populares trabajó una agenda más diversificada, que

tenía una línea de acción vinculada al desarrollo de capacidades cívico-políticas, mediante el trabajo cercano a las comunidades en temáticas que en apariencia no guardan relación directa con la política ni la democracia, como es la salud popular y el comedor comunitario. Pero estos asuntos que tocaban la vida cotidiana de las personas participantes constituían oportunidades para acercarse también al análisis político de la realidad y construirse como sujetos de su propia vida y del mundo.

El área de influencia de Promotores Populares se ubica en sectores económicamente deprimidos, con gérmenes de organización propia como son grupos vecinales no ligados a las estructuras de base de los entonces partidos hegemónicos (PRI y PAN), y la incidencia más notable está en la formación de sujetos que luego seguirían su propio ritmo de activismo en salud popular o en trabajo comunitario como formas de acción política. Como expresión de esa incidencia, a estos grupos e individuos se les vincula con la agenda de la lucha democrática de esos años en el ámbito nacional. Así es como llegan a participar en el grupo fundador de Alianza en 1994 y le aportan un matiz popular a la nueva organización. En Alianza, la incidencia más notable es lograr convocar a ciudadanas/nos que no solían tener experiencia de activismo para involucrarlas/los en tareas orientadas a la innovación del control democrático como es la observación de elecciones y la realización de consultas cuando estas actividades no existían en la ley. En ambas experiencias organizativas, los participantes descubren y desarrollan capacidades nuevas, incluso de nivel especializado, sea aprender un método para analizar una coyuntura, como ocurre en la educación popular, o usar tecnología y logística para aplicarla en procesos de consulta sobre asuntos coyunturales.

En ambos casos de estudio, de acuerdo con las narraciones de las/los participantes, estos espacios de activismo constituyeron oportunidades, que algunas/os consideran únicas, para involucrarse en la esfera política como sujetos protagonistas de cambios de la realidad, tanto desde las relaciones comunitarias cotidianas como mediante la influencia en procesos institucionalizados con el fin de empujar la democratización de estos. Esta incidencia no se quedó en el plano externo, sino que tocó también sus vidas personales y formas cotidianas de convivencia. Aunque algunos no continúan dentro de esas mismas organizaciones, el paso por ellas es ya parte de la historia personal que llevan consigo al incursionar en otros espacios de acción social.

De acuerdo con las narrativas de las personas participantes, las incidencias que se fueron gestando mediante su actuación en la organización Promotores Populares ocurrieron desde espacios comunitarios ubicados en zonas de escasos recursos de diferentes puntos de la ciudad donde realizaban su trabajo. Usando

incluso estrategias no políticas de hacer política como la salud popular y el impulso de proyectos productivos y solidarios acompañaron procesos en los que las/los participantes se descubren como sujetos políticos con capacidad de actuar en el espacio público e impulsar cambios en su realidad.

A través de esas experiencias entraron en relación con otros grupos con motivaciones similares, estrecharon vínculos que se concretaron un tiempo en la Red por la Democracia, el Comité de Apoyo al Pueblo de Chiapas, Alianza Cívica. Esas redes los introdujeron en asuntos de la agenda nacional prodemocrática, desde las iniciativas por un juego limpio en elecciones hasta la solidaridad con la lucha indígena zapatista. Las vías abiertas por Promotores Populares en algunas comunidades constituyeron oportunidades únicas de implicarse en la acción cívica organizada hacia nuevos horizontes de sentido en los cuales autoconstituirse como sujetos políticos críticos y solidarios.

En el caso de Alianza Cívica, según las narraciones de las personas entrevistadas, sus estrategias de acción son de carácter evidentemente político con un perfil profesionalizado, ya que su objetivo es incidir en las estructuras formales de la política, tanto la electoral como la parlamentaria y la económica. Esta organización inició llevando a cabo en Nuevo León las líneas de trabajo fijadas por la red nacional Alianza Cívica en torno a la democratización de los procesos electorales. La puesta en marcha de mecanismos participativos que aún no se contemplaban en las leyes, como son la observación electoral y las consultas ciudadanas, produjeron un efecto de demostración de que estas formas de involucramiento en la política son posibles. Esto generó un aprendizaje social que luego se constataría en la misma especialización lograda en los participantes que descubrieron el potencial de vigilancia y control ciudadano que puede construirse mediante esas prácticas.

A través de las narraciones memoriosas de las personas informantes encontramos los hitos de acciones colectivas con un perfil prodemocrático en un periodo de la historia local marcado por la globalización neoliberal y una aparente pasividad social tras la desmovilización de movimientos populares de mayor envergadura de décadas anteriores. Estas experiencias, contadas por los mismos sujetos que han participado en ellas desde su punto de vista y su ubicación en el ámbito social y político, ofrecen la oportunidad de conocer parte de la historia del sector cívico organizado de esta ciudad norteña de México para cubrir lagunas de conocimiento y recuperar algunos pasajes de la memoria social que dan cuenta de las iniciativas ciudadanas emprendidas a contrapelo del conservadurismo y de la burguesía empresarial.

BIBLIOGRAFÍA

- AGUILAR, Adrián G., y Escamilla, Irma. (2000). Reestructuración económica y mercado laboral metropolitano. Los casos de ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla. En Rocío Rosales Ortega (coord.), *Globalización y regiones en México* (pp. 179-217). Porrúa, Universidad Nacional Autónoma de México.
- ALATORRE, Felipe. (2005, octubre 18-19). Construcción de ciudadanía en Jalisco: un acercamiento al aporte de las redes de organizaciones civiles [conferencia]. V Seminario Anual de Investigación sobre el Tercer Sector. Universidad Iberoamericana.
- AMENTA, Edwin; Andrews, Kenneth, y Caren, Neal. (2019). The political institutions, processes, and outcomes movements seek to influence. En David Snow, Sarah Soule, Hanspeter Kriesi y Holly McCammon (eds.), *The Wiley Blackwell Companion to Social Movements* (pp. 449-465). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119168577.ch25>
- AMORES, José Emilio. (2007). Monterrey: una cultura propia. En Isabel Ortega Ridaura (coord.), *Nuevo León en el siglo XX. La industrialización. Del segundo auge industrial a la crisis de 1982* (pp. 73-107). Fondo Editorial Nuevo León.
- ARANDA, Marco Antonio, y Villarreal Martínez, María Teresa. (2019). La larga lucha por la democracia en Nuevo León. Aspectos organizacionales y políticos en el actuar colectivo de una parte de la sociedad civil organizada regionmontana. *Espacios Públicos*, 22(56), 65-83. <http://politicas.uaemex.mx/espaciospublicos/eppdfs/N56-4.pdf>
- ARTEAGA, Julio César; Martínez, Irma, y Ramírez, Nelly Cristina. (2007). *Las organizaciones de la sociedad civil en Nuevo León*. Consejo de Desarrollo Social de Nuevo León. <https://www.coneval.org.mx/sitios/RIEF/Documents/nuevoleon-estudioorganizaciones-2007.pdf>
- ARZALUZ, Socorro, y Zamora, Gabriela. (2018). Las organizaciones de la sociedad civil en Nuevo León. En Perla Orquídea Frago y Rocío Bravo (coords.), *La capacidad de incidencia de las organizaciones civiles en los procesos políticos en México: 2000-2014* (pp. 89-114). Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios del Futuro.
- ÁVILA, María de Jesús. (1996, septiembre 9). Hace encuesta Alianza Cívica sobre economía. *El Norte*, 3B.
- ÁVILA, María de Jesús. (1997, febrero 9). Viven ensayo de democracia. *El Norte*, 4B.

- BARELA, Liliana; Miguez, Mercedes, y García Conde, Luis (2009). *Algunos apuntes sobre historia oral y cómo abordarla*. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- BAUTISTA, José. (2007). Ciudadanos por la transparencia: surgimiento de un nuevo derecho en Jalisco. En *Acceso a la información: un derecho de avanzada en Jalisco* (pp. 15-20). Instituto de Transparencia e Información Pública.
- BRUMLEY, Krista M. (2001). An analytical framework for studying non-governmental organizations in Monterrey, Mexico. *Revista de Humanidades* (11), 95-136. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=38401108>
- BRUMLEY, Krista M. (2010). Understanding mexican NGOs: Goals, strategies, and the local context. *Qualitative Sociology* (33), 389-414.
- BRUMLEY, Krista M. (2013). From responsible debtors to citizens: Collective identity in the debtors' movement in Monterrey, Mexico. *Journal of Contemporary Ethnography*, 42(2), 135-168. <https://doi.org/10.1177/0891241612462133>
- BRUMLEY, Krista, y Shefner, Jon. (2014). Opportunity, context, and action: Understanding the divergent strategies of two mexican social movement coalitions in a time of tremendous change. *Sociological Spectrum* (34), 76-98. <https://doi.org/10.1080/02732173.2014.857526>
- CAHUICH, Martha Beatriz. (2004). Formas no políticas de hacer política. *Historia, Antropología y Fuentes Orales* (31), 143-175. <https://www.jstor.org/stable/27753163>
- CANTO, Manuel. (2004). La disputa teórica sobre las organizaciones civiles. Un asunto político-ideológico. En Jorge Cadena (coord.), *Las organizaciones civiles mexicanas hoy* (pp. 49-71). Universidad Nacional Autónoma de México. https://ru.ceiich.unam.mx/bitstream/123456789/3036/1/Organizaciones_civiles_hoy_web_Cap2_La_disputa_teorica_sobre_las_organizaciones_civiles.pdf
- CANTO, Manuel. (2018). Prólogo. En Perla Fragoso y Rocío Bravo (coords.), *La capacidad de incidencia de las organizaciones de las organizaciones civiles en los procesos políticos en México* (pp. 9-21). Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios del Futuro.
- CCINLAC (Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León) (2019). *Reporte de Transparencia y Buenas Prácticas. Renovación I. Años de estudio: 2017 y 2018*. Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León.
- COLLIER, David, y Mahoney, James. (1996). Insight and pitfalls. Selection bias in qualitative research. *World Politics*, 49(1), 56-91. <https://doi.org/10.1353/wp.1996.0023>

- CRESWELL, John, y Miller, Dana. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. *Theory into Practice*, 39(3), 124-130. https://doi.org/10.1207/s15430421tip3903_2
- DAGNINO, Evelina; Olvera, Alberto J., y Panfichi, Aldo. (2005). Introducción: para otra lectura de la disputa por la construcción democrática en América Latina. En Evelina Dagnino, Alberto Olvera y Aldo Panfichi (coords.), *La disputa por la construcción democrática en América Latina* (pp. 15-99). Fondo de Cultura Económica.
- FRAGOSO, Perla, y Bravo, Rocío. (coords.). *La capacidad de incidencia de las organizaciones de las organizaciones civiles en los procesos políticos en México*. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios del Futuro.
- GALLARDO, Helio. (2005). *Siglo XXI, militar en la izquierda*. Arlekin.
- GARCÍA, Claudia. (1997a, febrero 10). Eligen sin filas ni tumultos. *El Norte*, 5B.
- GARCÍA, Claudia. (1997b, febrero 10). Arrasa Liliana: es candidata. *El Norte*, 1B.
- GARCÍA, Miriam. (1995, marzo 08). Apoyan 7 mil en NL enjuiciar a Salinas. *El Norte*.
- GARZA, Jaqueline. (2017). Familiares organizados en la vigilancia y defensa de los derechos humanos frente a la desaparición de personas en México. *REDHES. Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales*, 9(17), 81-99. <https://odim.juridicas.unam.mx/detalle/819>
- GRIFFIN, Larry. (1993). Narrative, event-structure analysis, and causal interpretation in historical sociology. *The American Journal of Sociology*, 98(5), 1094-1133. <https://doi.org/10.1086/230140>
- GUEST, Greg; Bunce, Arwen, y Johnson, Laura. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. *Field Methods*, 18(1), 59-82. <https://doi.org/10.1177/1525822X05279903>
- ILINÁ, Nadejda. (2020). ¡Tu madre está en la lucha! La dimensión de género en la búsqueda de desaparecidos en Nuevo León, México. *Íconos* (67), 119-136. <https://doi.org/10.17141/iconos.67.2020.4172>
- IRAZUZTA, Ignacio. (2020). Buscar como investigar: prácticas de búsqueda en el mundo de la desaparición en México. *Sociología y Tecnociencia*, 10(1), 94-116. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7388168>
- JALOMO, Rosamaría. (1993, febrero 3). Propone frente regional reformas a Ley Electoral. *El Porvenir*.
- JUÁREZ, Óscar. (1995, octubre 15). Hará Alianza referéndum de economía. *El Norte*.
- LÓPEZ-VILLAFÑE, Víctor. (2007). De lo local a lo global. La experiencia de Nuevo León en la globalización. En Víctor López-Villafañe (coord.), *Nuevo León en el*

siglo XX. Apertura y globalización: de la crisis de 1982 al fin de siglo (pp. 61-86). Fondo Editorial Nuevo León.

- MARTÍNEZ CANIZÁLEZ, José Luis. (1999). Movimiento popular y sociedad civil en Nuevo León: agotamiento y esperanza. *Entorno Universitario* (1), 22-28.
- MEDELLÍN, Laura Nelly. (2006). La resistencia a la democracia deliberativa. Tensiones entre un gobierno de alternancia y la sociedad civil organizada. El caso del Parque Fundidora en Monterrey. *Región y Sociedad*, 36(18), 71-105. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-39252006000200003
- OLVERA RIVERA, Alberto Javier. (2004). Representaciones e ideologías de los organismos civiles en México: crítica de la selectividad y rescate del sentido de la idea de sociedad civil. En Jorge Cadena Roa (coord.), *Las organizaciones civiles mexicanas hoy* (pp. 23-47). Universidad Nacional Autónoma de México.
- O'REILLY, Michelle, y Parker, Nicola. (2012). Unsatisfactory saturation: a critical exploration of the notion of saturated sample sizes in qualitative research. *Qualitative Research*, 13(2), 190-197. <https://doi.org/10.1177/1468794112446106>
- PALACIOS, Lylia Isabel. (2007). De la cultura de trabajo a la cultura de la competitividad. En Víctor López-Villafañe (coord.), *Nuevo León en el siglo XX. Apertura y globalización: de la crisis de 1982 al fin de siglo* (pp. 163-196). Fondo Editorial Nuevo León.
- PASSY, Florence, y Monsch, Gian-Andrea. (2019). Biographical consequences of activism. En David Snow, Sarah Soule, Hanspeter Kriesi y Holly McCammon (eds.), *The Wiley Blackwell Companion to Social Movements* (pp. 499-514). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119168577.ch28>
- PLEYERS, Geoffrey, y Álvarez-Benavides, Antonio. (2019). La producción de la sociedad a través de los movimientos sociales. *Revista Española de Sociología*, 28(1), 141-149. <https://doi.org/10.22325/fes/res.2018.53>
- POZAS GARZA, María de los Ángeles. (1995). Movimientos sociales urbanos. En Gustavo Garza (coord.), *Atlas de Monterrey* (pp. 423-429). Gobierno del Estado de Nuevo León, Universidad Autónoma de Nuevo León, Instituto de Estudios Urbanos de Nuevo León, Colegio de México.
- Promotores Populares de Monterrey. (1992). *Memoria del Seminario de Reflexión Política Regional*. Documento interno inédito.
- Promotores Populares de Monterrey. (1993). *Informe de actividades del proyecto Centro apoyo a promotores sociales*. Documento interno inédito.
- Promotores Populares de Monterrey. (1997). *Directorio de organismos y grupos civiles por la democracia en Nuevo León*. Promotores Populares de Monterrey.
- Red por la Democracia. (1993, febrero 2). *Boletín de prensa*.

- REVILLA, Marisa. (2002). Las ONG como mecanismos de participación política. En Marisa Revilla (ed.), *Las ONG y la política* (pp. 15-65). Istmo.
- RODRÍGUEZ, Héctor, y Kinto, Manuel. (2010). Precariedad laboral en el mercado de trabajo del área metropolitana de Monterrey, 1990-2007. En Lylia Palacios (ed.), *Cuando México enfrenta la globalización. Permanencias y cambios en el área metropolitana de Monterrey* (pp. 345-372). Universidad Autónoma de Nuevo León.
- ROMO, Carmen. (1997, junio 9). Concluye Alianza Cívica consulta de propuestas. *El Norte*, 9B.
- RUIZ, José Fabián. (2018). La participación ciudadana en la ampliación de los derechos civiles en Nuevo León. El caso de Proyecto Litiga. *Trayectorias*, 20(46), 42-65. <https://www.scielo.org.mx/pdf/trcsuanl/v20n46/2007-1205-trcsuanl-20-46-42.pdf>
- SHEFNER, Jon, y Steward, Julie. (2011). Neoliberalism, grievances and democratization: An exploration of the role of material hardships in shaping Mexico's democratic transition. *Journal of World-Systems Research*, 17(2), 353-378. <https://doi.org/10.5195/jwsr.2011.421>
- TOURAINÉ, Alain. (1995). *Producción de la sociedad*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- VAN DYKE, Nella, y Taylor, Verta. (2019). The cultural outcomes of social movements. En David Snow, Sarah Soule, Hanspeter Kriesi y Holly McCammon (eds.), *The Wiley Blackwell Companion to Social Movements* (pp. 482-498). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119168577.ch27>
- VELA, José Ángel. (1995, agosto 20). Harán consulta cívica sobre la paz y el EZLN. *El Norte*.
- VILLARREAL, Ana. (2016). La transparencia de la víspera: violencia y participación social en el área metropolitana de Monterrey. En Socorro Arsaluz y Arturo Zárate (coords.), *Frontera norte y ciudadanía ante la encrucijada de la inseguridad* (pp. 111-132). El Colegio de la Frontera Norte.
- VILLARREAL MARTÍNEZ, María Teresa. (2010). Las organizaciones civiles en la gobernanza. *Inceptum*, 5(9), 155-171.
- VILLARREAL MARTÍNEZ, María Teresa. (2016). Los colectivos de familiares de personas desaparecidas y la procuración de justicia. *Intersticios Sociales*, 11(28), 1-28. <https://doi.org/10.55555/IS.11.94>
- VILLARREAL MARTÍNEZ, María Teresa; Palacios Hernández, Lylia Isabel, y Martínez Silva, Eleocadio. (2013). El área metropolitana de Monterrey. Precariedad laboral, violencia y formas de organización social. En Laura Becerra y Marisol López

(coords.), *Contrastes y constantes. Sociedad civil, precarización y cambio en las zonas metropolitanas de México* (pp. 93-123). Red Mexicana de Investigadores, Juan Pablos Editor.

ZARCO, Carlos, y Reygadas, Rafael. (2002). *Incidencia pública de las organizaciones civiles en México*. Consejo de Educación de Adultos de América Latina.